

Un nuevo gerundio: la concesión público-privada

**José Abrahám
Carrascosa**

*Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos*



EN Andalucía, vivimos permanentemente en ‘el gerundio’. Porque este tiempo verbal es un tiempo detenido. Pasa el tiempo y persiste la acción, inacabada. “Forma invariable no personal del verbo. Suele denotar acción o estados durativos”, dice el diccionario. Andalucía está ahí, siempre en el tránsito desolador de promesas renovadas para solucionar los problemas invariables.

En Andalucía, la acción de gobierno, incluso la de la oposición, está en eso, parece que se hace algo pero, en realidad, vivimos en un bucle de ‘planes’ contra el desempleo que no sirven para nada, de programas educativos que se acumulan sobre el fracaso escolar, de funcionarios que se jubilan como interinos, de obras que se anuncian en grandes carteles que acaban oxidados y se renuevan cíclicamente con las reprogramaciones continuas y cómo no, de la concesión público-privada.

La inversión en infraestructuras en Andalucía por concesión público-privada se está viendo sometida de forma bastante cuestionable a la veleta del interés político que en cada momento se marcan o les marcan a nuestros gestores regionales. La indefinición y el vaivén constante en la aplicación o desactivación

de esta fórmula están suponiendo graves perjuicios no sólo para las empresas que se implican en ellos, poniendo su tiempo y sus pocos recursos, sino también para los ciudadanos que ven desvanecerse proyectos que contribuirían al desarrollo económico y a la calidad de vida de las zonas en las que residen.

En las diferentes modernizaciones que hemos pasado los andaluces en las últimas décadas, nos han contado tanto los políticos de un color como los de otro que invertir en obra pública bajo la modalidad de participación público-privada era lo mejor para nuestros intereses y, paradójicamente, también nos han dicho que era algo “malo y pernicioso porque supone delegar gran parte de la planificación de las infraestructuras y de las inversiones, sometiénolas a la conformidad de los intereses empresariales”.

Lo cierto y verdad es que desde hace años han intentado convencer al sector de la construcción de que la colaboración público-privada era parte de su solución, una manera de garantizar la licitación y el mantenimiento de la obra pública en época de crisis. Se llegó a cifrar en 6.200 millones de euros el importe que la Junta de Andalucía pretendía licitar por

este sistema, lo que era todo un récord en España que se anunció a bombo y platillo.

Con todo esto se atrajo la atención de un sector que para entonces ya sufría una oleada de reprogramaciones de obra y de paralización de contratos en vigor, además de ser los que más aportan al incremento de las cifras del desempleo en España. En unos meses se celebraron innumerables jornadas y conferencias sobre el tema, promovidas por unos y otros, anunciando incluso que el sector financiero estaba muy interesado en financiar aunque en esas jornadas no se les veía ni por casualidad. Finalmente se convenció (quizás porque no había otra solución) al sector, y las empresas se lanzaron al mundo a buscar la financiación necesaria, que en España no existía, para poder licitar esas obras animados por el discurso alentador de la Administración regional. Algunas de estas infraestructuras vitales y de un notable peso económico, salieron a concurso, se adjudicaron e incluso se llegó a poner la primera piedra bajo una gran repercusión mediática. Y ahí se pisó el freno sin medir las consecuencias y la cascada de daños directos e indirectos a las empresas

que confiaron en su discurso y en su palabra.

Ahora, cuando la propia Junta de Andalucía anuncia la creación de una oficina de evaluación financiera que supuestamente garantizará el uso adecuado de la colaboración público-privada en Andalucía y el Estado lanza un plan extraordinario de 5.000 millones en carreteras con inversión privada, el sector en Andalucía no se cree nada, lo ve como algo lejano o como algo que está en ‘el gerundio’, tras tantos anuncios incumplidos y promesas rotas. Además, resulta inalcanzable para las economías y tamaño de las empresas constructoras andaluzas en estos momentos. Parece pensado para otros y con el máximo desconocimiento del sector en Andalucía.

Necesitamos soluciones asequibles, este sector se muere y necesita ayuda. Permítasenos que, al menos, podamos participar en estos nuevos planes, hagamos las obras necesarias en Andalucía y, con ello, les demostremos que somos capaces de crear empleo y riqueza. No nos entierren en planes imposibles que arrastren con nosotros a miles de familias que pueden ver la solución a sus graves problemas en los puestos de trabajo que crea la construcción. ■